LOS «TRIBUNALES MEDIÁTICOS» EN EL OBSOLETO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL INQUISITORIO*

Marco LARA KLAHR**

Es inolvidable el gesto de Mariel Solís [23 años], mezcla de incredulidad, vergüenza y pavor, cuando el 9 de julio de 2011 la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal la «presentó» ante decenas de reporteros y camarógrafos, atribuyéndole complicidad en el robo y asesinato del economista Salvador Rodríguez y Rodríguez, cometido en agosto de 2009, en los alrededores de la Ciudad Universitaria.

Entre las noticias del paisaje mediático mexicano que el público atiende con mayor expectación predominan las «presentaciones». Diarios y otros impresos; segmentos noticiosos de radio y televisión; interdiarios, agencias en línea, blogs y redes sociales despliegan de rutina historias ilustradas sobre personas que la policía o el Ejército capturó y pondrá a disposición del ministerio público, o que llevará ante el juez —solicitándole como medida cautelar, generalmente, su arraigo o encarcelamiento «preventivo».

Reforzadas con comunicados de prensa y entrevistas a funcionarios policiales, militares y/o judiciales, así como a los mismos imputados de delito, las

* El presente texto conforma los capítulos 1 y 2 de *¡Son los derechos! Manual para periodistas sobre el sistema penal acusatorio* (Programa de Seguridad y Justicia USAID, México 2012), y se reproduce con autorización expresa de su autor. Este material fue presentado en la ponencia del seminario taller “Programa de capacitación en la Reforma Procesal Penal en México. Litigio en Audiencias Previas”, celebrado en la ciudad de México en octubre de 2012.

** Periodista judicial egresado de la UNAM, reportero independiente; Director del Programa de Medios y Acceso a la Información del Instituto de Justicia Procesal Penal; Director de otromexico, SC; editor de presunciondeinocencia.org.mx; Miembro del Consejo Consultivo de *El Universal*. Pertenece al equipo latinoamericano que realiza el Worlds Journalism Study (Universidad de Munich) y escribe el blog *Edad Medi@tica*.

«presentaciones» son apenas el episodio climático y visible, la «pirotecnia mediática» —les llama Víctor Fernández¹— de los denominados «tribunales mediáticos» o «paralelos».

Cada día, parte importante de nuestra jornada laboral como periodistas dedicados a la cobertura informativa del delito y la violencia se consume atendiendo conferencias de prensa, boletines y entrevistas relativas a dichas «presentaciones», produciendo en consecuencia noticias provenientes de una sola fuente.

Vale la pena por ello tomarnos un momento para reflexionar acerca de las implicaciones de los «tribunales paralelos», no solo en las personas «presentadas», sino para las víctimas, la legalidad, la calidad de la Justicia y nuestra ética profesional.

El caso de Mariel nos muestra cómo se erigen, piedra sobre piedra, los «tribunales paralelos». No hay nada de esto que los periodistas —editores, coeditores, reporteros, fotorreporteros, camarógrafos— ignoremos, pero alcanza una nueva dimensión a nuestros ojos si lo miramos de forma contextual:

¹ «El bisturí de las estrellas» [Prólogo], en THOMAS T. Noguchi, *Cadáveres exquisitos*, Global Rythm Press/Ediciones Península, Barcelona 2011.

1. La Dirección General de Comunicación Social de la Procuraduría del DF convocó a los periodistas «de la fuente» a una conferencia de prensa para «presentar» a la supuesta tercera cómplice del robo y asesinato de Rodríguez y Rodríguez [67 años]. Es probable que los comunicadores institucionales tuvieran la certeza de que esta noticia causaría gran expectativa en las redacciones de los medios, por el prestigio académico de la víctima, la manera como fue asesinada —de un tiro en el pecho, durante un asalto a mediodía al que sobrevivieron otros dos colegas— y la obvia resonancia pública cuando fue cometido el crimen, dos años atrás.
2. Protagonizaron la «presentación» motivo de la conferencia de prensa el fiscal para Homicidios Joel Díaz Escobar y, claro, la «presentada», con uno de esos chalecos amarillos con franjas verticales rojas encima que evocan los sambenitos inquisitoriales, y detrás el sello institucional de la Procuraduría del DF.
3. A partir de esa tarde y durante los dos días posteriores [julio 10 y 11], los principales medios

masivos dieron noticia de la captura [julio 8], presentación, ejercicio de la acción penal y puesta en «prisión preventiva», en el Reclusorio Oriente, de Mariel. «Cae mujer involucrada en homicidio de catedrático de la UNAM» fue el encabezado predominante en el tropel de notas publicadas —debido a que la mayoría de los medios dentro y fuera de la Ciudad de México reprodujo el cable alusivo de la Agencia Notimex.

4. En una segunda conferencia de prensa [julio 13], el subprocurador Jesús Rodríguez Almeida amplió ante los reporteros la información sobre el caso, pretendiendo reforzar el «tribunal mediático» —en un momento en el que con creciente fuerza se diseminaban a través de los nuevos medios dudas sobre la consistencia de las imputaciones hechas por la Procuraduría del DF.
5. Al principio, en general, los medios noticiosos de la más diversa ideología se ajustaron impecablemente a la versión oficial acerca de la culpabilidad de Mariel. Algunos ejemplos:

LA JORNADA [julio 10]

Encabezado: «Detienen a implicada en asesinato de catedrático»

Contenido: No obstante la afirmación inculpatoria del encabezado, en la entrada se hacía notar que Mariel estaba «presuntamente involucrada». Pero luego se validaba a la fuente y volvía a criminalizarse a la «presentada», pues se apuntaba que «De acuerdo con las investigaciones... vigiló a la víctima en el banco de donde retiró 34 mil pesos» y «fue identificada por las grabaciones de las cámaras de seguridad de la sucursal bancaria, además de que sus cómplices, quienes ya fueron... sentenciados, la señalaron como la persona que les informó que el afectado llevaba una fuerte cantidad de dinero».

GRUPO FÓRMULA Y EL UNIVERSAL [julio 9]

Encabezado: «Cae mujer involucrada en homicidio de catedrático de la UNAM»

Contenido: Tanto el consorcio radiofónico como el diario y decenas de medios a través del país, reprodujeron el cable de Notimex, cabeceado de manera incriminante al abrir destacando la aprehensión de

Mariel como una proeza policial: «Agentes judiciales lograron detener a Mariel Solís Martínez... presuntamente involucrada en el homicidio del catedrático de la UNAM Salvador Rodríguez y Rodríguez...», lo cual reforzó en el penúltimo párrafo, al apuntar que «Con la detención... de los dos asaltantes materiales... y el trabajo de inteligencia, se consiguió finalmente la captura de la última involucrada en los hechos».

AGENCIA PROCESO [julio 11]

Encabezado: «Mariel Solís, una estudiante acusada de homicidio»

Contenido: Desde el principio la Agencia Proceso no solo evitó sumarse al «tribunal mediático» contra Mariel —en el tibio encabezado, el enfoque y el lenguaje—, sino que dio voz a familiares y amigos que sostenían su inocencia, y denunció su detención «sin orden de aprehensión» y con uso excesivo de la fuerza, así como la presión psicológica a la que la sometieron agentes judiciales «para que se confesara responsable».

6. En esa suerte de rito medieval, sin que iniciara aun el juicio penal como corresponde en un Estado de derecho, la «condena mediática» fue dictada de forma inapelable, el «juicio» quedó cerrado y los reporteros se marcharon a otros asuntos: para la mancuerna Procuraduría del DF-medios industriales, y seguramente para millones de ciudadanos, Mariel era culpable. Pero, ¿lo era ante la ley, con base en una decisión de los tribunales, según dicta la Constitución?

Desde que se tuvo noticia de la detención de Mariel Solís, cientos de ciberactivistas desplegaron una campaña a través de las redes sociales virtuales, denunciando que estaba siendo víctima de una arbitrariedad del Estado. Esto atrajo la atención de los medios convencionales, que habiendo consumado en un primer momento el «juicio mediático», con los días fueron dando espacio a las versiones suspicaces de *facebookeros*, *tuiteros* y *blogueros*.

El 14 de julio, menos de una semana después de la detención, la Procuraduría del DF se desistió. Las inconsistentes pruebas —un video de la sucursal bancaria en cuya proximidad fue asesinado el académico Rodríguez y Rodríguez, y

la declaración de una persona que estaba en prisión, condenada debido a aquel hecho—fueron rechazadas por el juez, disponiendo la liberación de Mariel, que abandonó entonces el Reclusorio Oriente y atrajo de nueva cuenta la atención de los medios, interesados ahora en reivindicarla ante el público, siempre dentro de los cánones del infoentretenimiento, mediante una suerte de telenovela de no-ficción.

¿Con la «presunción de culpabilidad» estamos más seguros?

El desenlace mediático del caso de Mariel Solís no es común; sabemos que, por costumbre, concluido el «juicio paralelo» la industria noticiosa y los periodistas abandonamos el asunto, olvidándonos de la víctima y el detenido, habituando al público a ese estado emocional de avidez por nuevos «presentados» y olvido de los ya mediáticamente juzgados y condenados, cuya suerte, lo mismo que la de las víctimas, es confinada a la desmemoria.

Desde su origen a mediados del siglo XIX hasta hoy, entrado el XXI, la prensa industrial ha fungido como apéndice del sistema de justicia penal inquisitorio, convirtiendo en culpables de facto, a los ojos de la comunidad, a ciudadanos imputados de delito cuya culpabilidad muchas veces el aparato de procuración de

justicia será incapaz de demostrar plenamente.

Durante la última década, desde el gobierno, la academia y la sociedad civil organizada se han producido en México indicadores cada vez más precisos sobre la inoperancia del sistema de justicia penal, que bajo el modelo inquisitivo, ajeno a los estándares internacionales de derechos humanos, se enfoca en la «presunción de culpabilidad», trasladando al imputado la responsabilidad de demostrar su inocencia e imponiéndole el castigo anticipado que implica «arraigarlo» o encarcelarlo sin haber sido juzgado y condenado.

A través de los «tribunales mediáticos» —al descontextualizar un fenómeno delictivo, atribuyéndolo además a la mala fe o negligencia de los «presentados»—, los periodistas y los medios no solo contribuimos a criminalizar y estigmatizar a miles de ciudadanos, sino que llegamos a legitimar un sistema de justicia penal incapaz y corrupto.

Al mismo tiempo, invisibilizamos sus problemas estructurales, que se expresan en un deficiente acceso de los mexicanos a la Justicia —víctimas e imputados de delito, y sus familias—; violación sistemática del debido proceso y otros derechos; no restitución del daño a las víctimas y sus familias; impunidad generalizada, y prisiones

sobrepobladas, hacinadas, violentas y corruptas, imposibilitadas para cumplir su objetivo primordial de reinserción social de las personas condenadas por haber delinquido.

En nuestro país, cada año miles de detenidos que son o podrían ser inocentes —porque su culpabilidad jamás será demostrada— entran y salen de las prisiones y centros de arraigo. La mayoría de ellos fueron juzgados previamente por los «tribunales mediáticos», lo mismo que cientos de acusados cuyos casos se desvanecieron casi desde el principio.

Puesto que los periodistas somos corresponsables de ese estado de cosas, conviene que tengamos presentes indicadores básicos² acerca de los costos que produce para las personas, sus familias y comunidades, y la sociedad y el Estado en México el modelo inquisitivo de justicia penal que

propicia y se sirve de los «tribunales mediáticos»:

- De las 220,000 personas que, en promedio, aloja de manera permanente el sistema penitenciario, el 42% no ha sido juzgada —está en «prisión preventiva—».
- O sea, en este mismo momento hay un promedio de 92,400 presos que podrían ser inocentes o cuya culpabilidad quizá nunca sea demostrada.
- Cada año son liberadas por falta de pruebas, en promedio, 50,000 de las personas que habían sido metidas en «prisión preventiva» por los jueces a solicitud del ministerio público.
- Mantener a esas miles de personas en «prisión preventiva», muchas veces innecesariamente, impone a la sociedad en su conjunto —detenidos y sus familias, comunidades y gobierno— un costo económico de alrededor de 10,000 millones de pesos anuales.
- Debido a que por rutina, e incentivado por el sistema inquisitorio, el ministerio público solicita el encarcelamiento «preventivo» de los imputados de delito, las prisiones se mantienen sobre pobladas y hacinadas, obligando

² Fuentes: Instituto de Justicia Procesal Penal [México], www.presunciondeinocencia.org.mx; ZEPEDA LECUONA, Guillermo, *¿Cuánto nos cuesta la prisión sin condena? Costos económicos y sociales de la prisión preventiva en México* (Open Society Justice Initiative, México, 2010) y *Los mitos de la prisión preventiva en México*, segunda edición (Open Society Justice Initiative, México 2010).

a los gobiernos estatales a gastar en el sistema penitenciario uno de cada tres pesos asignados a la seguridad pública.

▪ Lejos de ser espacios para la reinserción social, las prisiones:

a) permiten a la delincuencia organizada enrolar a presos y sus familias;

b) producen un nivel de violencia debido al cual, por ejemplo, un preso tiene siete veces más probabilidades de morir asesinado que un ciudadano en libertad;

c) en ellas los presos y sus familias sufren una pérdida anual de 4.5 mil millones por improductividad, debido a las precarias opciones educativas y laborales, ahondando sus condiciones de marginación;

d) una muestra de las condiciones sanitarias predominantes es el hecho de que, por ejemplo, entre la población femenina la más expuesta a contraer VIH es la que se encuentra bajo reclusión; y

e) el imperio de la corrupción hace que cada preso y su familia deban pagar, en promedio, 16 pesos diarios por servicios que tendrían que ser gratuitos, causando un daño a su de por sí frágil economía.

Un debate permanente en la sociedad y dentro del gremio periodístico es si al menos la «presunción de culpabilidad» —es decir, el hecho de que el sistema de justicia penal inquisitorio encarcele indiscriminadamente a las personas imputadas de delito— permite que gocemos como ciudadanos de mayor seguridad.

Es frecuente también escuchar entre periodistas de diversas generaciones y especialidades la afirmación de que exhibir, mediante los «tribunales paralelos», a las personas detenidas sirve para que el público conozca a los criminales y pueda eventualmente denunciarlos si acaso fue víctima de ellos.

Análisis de organizaciones civiles y el gobierno federal publicados a lo largo de 2011³

³ Fuentes: «Resultados de la ENVIPE de 2011», Instituto Nacional de Estadística y Geografía, septiembre, 2011; *Delitos de alto impacto en México. En el marco de la reforma penal, evaluación del desempeño del Ministerio Público en el combate contra el secuestro y estudio analítico de cifras oficiales sobre extorsión*, Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, AC, mayo, 2011; *Índice de víctimas visibles e invisibles de delitos graves*, México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, AC, agosto, 2011; *Números rojos del sistema penal*, Centro de Investigación para el Desarrollo AC, octubre, 2011.

coinciden, sin embargo, en que el sistema de justicia penal inquisitorio es inoperante y, de hecho, podría estar generando incentivos para delinquir, a causa de la impunidad creciente. No perdamos de vista los siguientes resultados de dichos análisis:

Las víctimas del delito

- Cerca de la cuarta parte de las personas mayores de 18 años fue víctima de al menos un delito (o sea 23,956 por cada 100,000 habitantes).
- Así, miembros del 36% de los hogares mexicanos fueron víctima del delito.

La impunidad

- En el 80.7% de los casos, sin embargo, las víctimas prefirieron no denunciar.
- Sumando a quienes no denunciaron o acudieron al ministerio público pero este no inició averiguación previa, resultó que el 92% de los delitos cometidos no fueron denunciados. Esto equivale a decir que solo fue denunciado el 8% de los delitos cometidos.
- Entre las razones aducidas por los encuestados que dijeron no haber denunciado destacan el que lo consideraron una «pérdida de tiempo», tuvieron «desconfianza en la autoridad»,

«por miedo al agresor», porque consideraron los trámites «largos y difíciles», «por actitud hostil de la autoridad» o «por miedo a que los extorsionaran».

- En el 28.6% de los casos denunciados, las víctimas consideraron que «No pasó nada» o «No se resolvió».
- Esta percepción no fue ajena a la realidad: solo en el 10% de los casos denunciados fueron dictadas órdenes de aprehensión, de las cuales se cumplió la mitad, y no más que el 6% de las personas denunciadas fueron presentadas ante una autoridad judicial.
- Finalmente, del 100% de los delitos denunciados, apenas en el 1.3% hubo personas encontradas culpables.
- Toda esa impunidad implícita tiene medida: las probabilidades de una persona que delinque de ser juzgada son del 1.7%.

La percepción de inseguridad

- Tendencialmente, el 69.5% de los ciudadanos se percibe inseguro.
- Únicamente el 49.6%, menos de la mitad, considera «muy y algo efectivo» el desempeño de las autoridades.

La creciente incidencia delictiva

- Durante el último lustro (2007-2011), en el 100% de las entidades federativas del país aumentó la comisión de al menos un tipo de delito violento. Por ejemplo, en el 27% de ellas creció el promedio mensual de homicidios; en el 24%, el de secuestros, y en el 19%, el de extorsión.
- En México la incidencia delictiva por cada 100,000 habitantes triplica la de Estados Unidos.

Al pretender que en una democracia pueden obviarse el proceso judicial y la decisión de los tribunales acerca de inocencia o culpabilidad de una persona acusada de un delito, las instituciones y los medios que montan los «tribunales paralelos» invisibilizan la realidad mostrada por estas cifras, convirtiéndose al mismo tiempo en parte del problema. Los periodistas también lo somos, pero quizá podemos cambiar si empezamos respondiéndonos las siguientes preguntas de cara a los «juicios mediáticos»:

- ¿Cuántas de las personas que la autoridad está presentándonos para enjuiciarla mediáticamente irán a juicio y resultarán inocentes?
- Si casi la mitad de las personas encarceladas no ha tenido juicio

y miles de ellas al final serán absueltas por un juez, ¿significa que estamos contribuyendo a enviar a prisión a inocentes?

- ¿Las confesiones auto- inculpatorias que se le atribuyen a los «presentados» podrían haber sido obtenidas mediante tortura cometida por policías y/o militares?

- ¿Toda persona imputada de delito que se nos «presenta», sea o no condenada en el futuro, amerita ser puesta en «prisión preventiva» o en muchos casos bastaría con que se le imponga una medida cautelar que solo restrinja su libertad mientras se le sigue proceso?

- ¿Cuál es nuestra responsabilidad como piezas de una maquinaria que somete a miles de nuestros conciudadanos imputados de delito y sus familias a un sistema de justicia penal como el descrito?

- ¿El poco tiempo del que disponemos habitualmente para hacer nuestro trabajo atenúa esa responsabilidad?

- A la par del castigo anticipado que constituyen el «arraigo» o la prisión previa al juicio para el imputado, ¿el sistema de justicia penal está haciéndose cargo, con el mismo ímpetu, de que los

derechos de la víctima y su familia sean restituidos?

▪ ¿Nuestra función ante la comunidad es la de fiscales o jueces, o la de vigilar que el sistema de justicia penal provea Justicia respetando los derechos de los imputados y las víctimas de delito, y sus familias?

Finalmente, no olvidemos que —como ha documentado la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en su «Recomendación 3/2012» a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y al procurador Jesús Rodríguez Almeida, por la «Exhibición de personas, publicidad de su información confidencial y la contenida en los expedientes de averiguación previa»— las «presentaciones» de personas imputadas de delito suelen ser organizadas por las autoridades policiales y judiciales con base en prácticas previas que constituyen tortura, tratos crueles y degradantes y otros abusos sancionados a su vez por leyes penales y causantes de severos daños psicosociales en dichas personas, sus familias y su comunidad.